

## El pueblo comienza a manifestarse

---

Decenas de miles de personas marcharon por las calles de las principales ciudades de Colombia el 18 de mayo, a raíz de la iniciación en Cartagena de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos. Nuevamente hubo grandes manifestaciones el 16 de septiembre y el 12 de octubre se realizó un nutrido paro nacional. En este periodo se adelantaron, así mismo, movilizaciones de indígenas, de usuarios afectados por las altas tarifas de los servicios públicos, de arroceros contra las importaciones masivas de este cereal y trabajadores de la salud contra la destrucción de la red pública hospitalaria; y cerca de cien mil camioneros y los trabajadores de Ecopetrol tuvieron que ir al paro exigiendo solución a sus exigencias. Las consignas de las protestas han incluido una amplia gama de necesidades populares al igual que críticas a las distintas políticas gubernamentales, pero todas coinciden en rechazar la reelección de Uribe Vélez, el TLC y el paquete legislativo, cuyo eje es la reforma tributaria.

Las principales agrupaciones de izquierda y la Gran Coalición Democrática, que lideró el año pasado la lucha exitosa contra el referendo, han encontrado en estos temas planteados por el pueblo muchos motivos de unidad, un espacio abierto para buscar convergencias programáticas y la posibilidad de unirse en la movilización social.

Hacia varios años que en un lapso tan corto de tiempo, menos de seis meses, no se lograban acciones de semejante envergadura. En su inmensa mayoría estos hechos no fueron registrados por los medios de comunicación y, cuando ocasionalmente lo hicieron, sus crónicas y noticias fueron tendenciosas, dando la versión gobiernista sobre tan importante realidad del movimiento popular. Los *realities* y las vicisitudes de la guerra y la paz con paramilitares y guerrilla tienen, por el contrario, amplia difusión y por ello muchos colombianos que carecen de otras fuentes informativas, forman su opinión basándose en dichas noticias. De ahí que las encuestas arrojen todavía, y parece que no por mucho tiempo, una amplia popularidad del primer mandatario. Establecen que el único problema del país es la violencia, como si no existiera la política recolonizadora de Estados Unidos sobre nuestro país, causa fundamental del desempleo y la miseria que se viven. Los medios llegan a registrar hasta la insólita ocurrencia de que los colombianos somos el pueblo más feliz del mundo.

Pero poco a poco la población se va curando de esta especie de sopor, y se apartan de la imagen deformada que de la situación del país hacen surgir los “formadores de opinión”, los medios faranduleros y superficiales.

Los hechos son tozudos. La hecatombe hospitalaria y de la salud pública afecta a millones de colombianos con toda su evidencia sobrecogedora; el aumento de los impuestos se ciernen sobre todos los consumidores; las temidas facturas de los servicios públicos sobrecogen incluso a los estratos altos; la ilusión exportadora se desvanece y los productores de la ciudad y del campo ven disminuir sus compradores en el mercado interno, y esto lleva a que Uribe sea visto cada vez más como un politiquero de provincia con ínfulas de Mesías, y no como salvador de la patria, la imagen que ha venido vendiendo. Las zalamerías con Estados Unidos destapan su docilidad con los gringos y su autoritarismo y su soberbia con los colombianos. Sus discursos moralizantes contrastan con las ollas podridas que se les destapan a diario a sus más cercanos amigos y colaboradores, sus propias maniobras para comprar votos de parlamentarios para sus proyectos, y con el apoyo rabioso que recibe de los más retrógrados politiqueros del país, encabezados por Turbay Ayala.

Para la inminente suscripción del TLC con Estados Unidos, Uribe ha aceptado todos los condicionamientos, presiones y chantajes de esa potencia, y recibe bofetadas como si fueran condecoraciones. A cada exigencia norteamericana le sigue una concesión gubernamental. Cuando piden eliminar la franja de precios, el Ejecutivo se adelanta cambiando los mecanismos de compras de cosechas y anuncia que se negociará producto por producto, de acuerdo con lo formulado por la negociadora norteamericana Regina Vargo. Cuando solicitan acceso a las compras gubernamentales, les responde modificando la ley de contratación pública. Cuando piden garantías para sus inversiones, les promete que ninguna inversión futura se verá afectada por eventuales cambios tributarios y protege cuidadosamente las inversiones petroleras norteamericanas. *Contrariu sensu*, cuando los pequeños industriales piden que como contraprestación a la entrega del mercado interno se pidan fondos para compensar sus pérdidas, les responde que esos habría que conseguirlos con la banca privada extranjera y que no debe esperarse este tipo de fondos del TLC.

El gobierno sigue por el camino del endeudamiento y preparándolo elaboró un presupuesto en el cual los gastos superan con creces los ingresos y ahora está a las puertas de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entrañará nuevos condicionamientos en materia de ajuste fiscal y privatizaciones a costa de los ingresos de la mayoría de habitantes del país.

Contrario a lo que se informa a la opinión, en las negociaciones con Estados Unidos lo determinante no está en la defensa de la economía nacional y sus principales sectores, sino en la suerte de la “Seguridad Democrática” y el Plan Colombia, financiados por Estados Unidos y del acuerdo con el FMI que depende de los votos gringos en la entidad. En todos estos aspectos Estados Unidos tiene las cartas ganadoras y el gobierno colombiano asume una vergonzosa adoración por quienes tienen de rehén al país, pues para poder mantener sus programas y políticas Uribe depende del apoyo norteamericano.

La situación para el pueblo es completamente opuesta. Para conquistar sus más elementales reivindicaciones tiene que identificar y enfrentarse no solamente al lacayo sino al amo. La alternativa de convertir a Colombia en una colonia norteamericana levanta el más enérgico rechazo, aunque en medio de la avalancha de propaganda oficial sobre las virtudes del TLC diversos sondeos demuestran que entre la mayoría de la población hay miedo, escepticismo y desconfianza, pero en núcleos importantes despunta una voluntad de lucha.

La tarea que sigue es supremamente ardua y requiere el concurso de millones de colombianos. No es reto de poca envergadura detener la reforma tributaria y el paquete legislativo gubernamental, impedir la negociación, firma o ratificación del TLC, detener la reelección de Uribe y de paso salvar la salud y la educación públicas y resguardar el mercado interno y la soberanía nacional. Afortunadamente entre los sectores más avanzados hay creciente conciencia de que estos son los imperativos de la hora.

No basta detener la reelección si el sucesor de Uribe mantiene el rumbo de la actual administración, o sus aspectos centrales. La oposición, al contrario de lo que se difunde en algunos medios, no está a las puertas del poder. Está a las puertas de impulsar sí una movilización social de la cual salga un propósito común, mayor influencia y la gestación de una verdadera alternativa que sea capaz de cambiar el rumbo del país. Estamos en la hora de formar el equipo, compactarlo, dotarlo de una táctica y una estrategia adecuadas, desarrollar la resistencia civil, afianzar la necesidad de civilizar la lucha política y resguardar al movimiento de masas y a sus dirigentes del autoritarismo y la represión gubernamentales.

